

C

Columna

José Miguel Castro
Diputado de la República



Seguridad en Antofagasta

Durante la reciente visita del Presidente Gabriel Boric a la región de Antofagasta, destacó una supuesta disminución en los homicidios y robos de vehículos, cifras que generaron dudas entre los ciudadanos y representantes políticos. Lo que el Mandatario describió parece muy lejano a la realidad que enfrenta el norte del país, en especial Antofagasta.

Como representante de la región, me parece necesario que se aclare lo que el Presidente mencionó ya que los datos oficiales del Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) de Carabineros no coinciden con su relato. Según Boric, los homicidios habrían disminuido en más del 20% y los robos de vehículos en un 70%. Sin embargo, los datos proporcionados por STOP muestran que los homicidios no han disminuido de manera significativa y, en las últimas semanas, han aumentado un 50% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Estas discrepancias generan confusión y, lo que es más grave, debilitan la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.

Aún más alarmante es el incremento del 225% en los casos de violaciones en la región, un problema que no puede ser ignorado. Además, los antofagastinos continúan siendo testigos de balaceras en zonas residenciales y otros actos de violencia que afectan su vida diaria. Esto contrasta drásticamente con el optimismo que mostró el Presidente.

Además, el descontrolado flujo de inmigración ilegal es otro factor crítico que agrava la inseguridad en el norte de Chile. Si bien muchos inmigrantes llegan en busca de una mejor vida, es innegable la conexión entre el narcotráfico, la trata de personas y la entrada de inmigrantes ilegales. En Colchane y Huará, el tráfico de personas es una realidad diaria. Este problema trasciende lo local, impactando al país entero.

Desde el Congreso he impulsado la tipificación del ingreso ilegal como delito, propuesta ignorada sistemáticamente por el gobierno. Mientras tanto, estamos debatiendo si implementar una zanja o barreras en las fronteras, pero la pregunta es clara: ¿Se están tomando las medidas correctas para frenar la inmigración ilegal? ¿Tienen las policías y el Ejército las herramientas necesarias? Además de la violencia física, enfrentamos una crisis de confianza. Muchas personas han dejado de denunciar delitos porque sienten que no obtendrán una respuesta efectiva. Un ejemplo recurrente es el de las fiestas clandestinas en sectores como Casa de Piedra, donde los vecinos soportan balaceras, ruido constante y posible tráfico de drogas y prostitución sin intervención policial.

Para diseñar políticas públicas efectivas, necesitamos basarnos en cifras claras y veraces, no en números que no reflejan la realidad. Minimizar los problemas -o acusar rencillas entre políticos- no traerá soluciones ni progreso. Si queremos enfrentar la delincuencia en Antofagasta, necesitamos compromiso y transparencia, reconociendo la magnitud del desafío.

Es urgente que el gobierno reconozca la verdadera situación de seguridad en la región y actúe en consecuencia. Los antofagastinos merecen vivir sin miedo y contar con autoridades que hablen con la verdad. Este es un llamado a rectificar, a basarse en datos reales y a tomar las medidas necesarias para devolver la tranquilidad a nuestras familias.

La seguridad ciudadana no se logrará con discursos complacientes, sino con acciones concretas, como el refuerzo de las policías, el endurecimiento de penas y políticas migratorias claras. Solo así podremos recuperar la confianza de la ciudadanía y devolver la paz a nuestras calles.